

México, Marzo 13 de 1874.—*García Ramírez.*

*Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Marzo 20 de 1874.—Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones, y archívense á su vez el Toca.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Marzo 25 de 1874.—*Alejo Gomez Nguarte.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por varios ciudadanos, contra algunos actos de las autoridades encargadas de intervenir en las elecciones municipales de Guadalajara que debieron verificarse el día 2 de Noviembre de 1873.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito segundo suplente.

El Promotor fiscal dice: varios ciudadanos, como miembros de diversos clubs políticos, se han presentado el 2 del corriente solicitando amparo contra algunos actos de las elecciones municipales de esta Capital, que se estaban ejecutando el mismo dia. Apoyan su pretension en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, sosteniendo que se violan en su perjuicio las garantías señaladas por los artículos 9, 14, 35 en su fraccion 1ª, 39 y 109 (probablemente de la Constitucion general, que por omision no citan), y tratan de demostrarlo con los tres hechos mencionados en los siguientes razonamientos.

Primero: Que teniendo los clubs estable-

cidos por lo menos dos meses antes de la eleccion, el derecho exclusivo de intervenir en ella por medio de sus fiscales, segun la ley electoral del Estado de 12 de Diciembre de 1870 y su correlativa publicada bajo el número 253, se expidió el decreto número 370 ampliando aquel derecho á los clubs que se organizaran con veinte dias de anticipacion.

Segundo: Que los municipales nombrados por el Ayuntamiento para presidir las casillas electorales, son empleados, no debiendo por tal circunstancia habérselos dado esa comision segun el artículo 53 de la ley orgánica electoral y el 3º del decreto número 253.

Y tercero: Que gozando los clubs el derecho conforme á la ley citada, de nombrar fiscales como lo hicieron, para que ejercieran sus funciones en determinadas mesas, el Ayuntamiento los destinó para diversas de aquellas que les habian señalado. Concluyen su ocuso pidiendo que se suspendan los actos de que se quejan, y recusando al Juez propietario, al primer suplente y al secretario.

Llama la atencion fiscal, que el ocuso antes mencionado, sin pasar por el Juez primero suplente para que este lo remitiera al segundo, en virtud de las recusaciones hechas y segun la tramitacion establecida para tales casos, haya llegado desde luego al segundo suplente que se avocó su conocimiento; y mas todavia, cuando la actividad y obvio de trámites, entonces manifestada sin duda para evitar demoras en el negocio, se vé contrariada despues con la lentitud para recoger seis firmas y cumplir con lo prevenido en la parte final del artículo 9º de la ley orgánica de amparos, pues habiendo recibido el Juzgado desde el 4 del corriente á las nueve de la mañana, los informes de los CC. Gobernador del Estado y Presidente del Ayuntamiento, han pasado mas de cuatro dias útiles hasta el 8 á la una de la tarde, para que al suscrito se corriera en traslado el expediente.

Luego que recibió el ocurso el C. Juez segundo suplente, calificó de legales las recusaciones y bajo su exclusiva responsabilidad mandó suspender las elecciones municipales que se ejecutaban, expidiendo órdenes directas á los presidentes de las casillas, valiéndose para ello de los mismos peticionarios. El personal de ese Juzgado, salvo lo que se resuelva por la Suprema Corte de la Nación, ha echado sobre sí una carga muy pesada con haber dictado esa medida suspensiva que no pudo fundar en la parte final del artículo 52 de la ley orgánica de amparos, ni en atención á la urgencia notoria que menciona en su auto relativo.

Su responsabilidad es gravísima en concepto del que suscribe, según la prevención del artículo 25 de la ley citada, porque en efecto, no debió, respetando el artículo 82 de la misma ley, haber dictado su providencia, puesto que los actos reclamados no están comprendidos en la fracción 1ª artículo 19, como se verá despues; que no se limitó á proteger á los individuos particulares que lo solicitaban, ni sobre los tres hechos que marcan, sino que fué general contra todos los ciudadanos; atentatoria á la soberanía del pueblo; invasora de la independencia del Estado; contraria á los artículos 40, 102 y correlativos de la Constitución federal; y se extendió á suspender las elecciones municipales, dando mucho mas de lo que se le podía y podía pedírsele.

Pues bien, esa responsabilidad ya contrainda, llegaría á su colmo, no tendría límites para el personal de ese Juzgado, si al resolver sobre lo principal decretara el amparo pedido. Basta leer los informes rendidos por los CC. Gobernador del Estado y Presidente del Ayuntamiento, para convencerse hasta la evidencia de que no se ha atacado en contra de los peticionarios garantía alguna constitucional; de que no tienen fundamento legal para lo que solicitan y de que tratan de prostituir el respetable recurso de amparo y la augusta Justicia de la Unión, haciéndolos servir como arma de partido en

cuestiones sumamente locales; V. C. Juez, no se prestará sin duda á que se consumen esos atentados.

Porque en verdad, ¿donde están las informaciones á los varios artículos constitucionales que se mencionan en los tres hechos ó actos señalados por los amparantes? Examiné el negocio por el C. Juez segundo suplente, sin espíritu de partido y con toda la calma é imparcialidad que debe caracterizarlo como representante del poder federal, como la ley impasible que aplica, como la justicia misma que no se tuerce ni quebranta por consideraciones particulares, y encontrará que ni sombra de ataque ha existido contra los artículos 9, 14, 25, 39 y 109 de la Constitución, en las elecciones municipales que se practicaban el 2 del corriente.

Lo que alegan los amparantes en el primero de sus razonamientos, no es un ataque á sus derechos constitucionales, ni menos una violación del artículo 14 de la Constitución federal, porque el decreto 370 que señalan como motivo de ella, fué expedido por el Congreso del Estado que tiene la facultad de legislar sobre la materia de que trata; no atacó los derechos de los clubs políticos, sino que los amplió á los que se establecieron veinte dias por lo menos antes de las elecciones; lejos de restringir la libertad electoral, le dió mas ensanche; versó sobre hechos que estaban para ejecutarse; y estuvo muy distante por lo mismo, de causar efecto retroactivo. ¿Puede decirse acaso, que la intervencion en las elecciones de los fiscales pertenecientes á clubs establecidos con veinte dias de anticipacion, privaban ó restringian siquiera en sus derechos, para vigilar y cuidar de la legalidad del acto, á los fiscales de los clubs antiguos? Si estos, sin aquellos hubieran ejercido sus funciones, en nada las habrían aumentado, así como tampoco en nada podían haberse disminuido con la concurrencia de nuevos vigilantes.

Menos apariencias de fundamento toda-

vía se encuentran en los razonamientos segundo y último de los petentes. En estos no se citan como en el anterior, cuales son los artículos de la Constitución federal atacados. Se habla de infracciones cometidas contra la ley electoral del Estado y decreto número 253, por ser empleados los municipales destinados para presidir las casillas, y porque los fiscales que nombraron los clubs para determinadas mesas, fueron designados por el Ayuntamiento, como escrutadores y secretarios para otras diferentes.

Pero no siendo incompatible el cargo de municipal con los empleos que dicen los amparantes desempeñan los miembros del Ayuntamiento designados para presidir las casillas electorales, ni versando la prohibición de que sean empleados mas que con los vecinos que se nombren de escrutadores y secretarios, á falta de los fiscales de los clubs, y estando por otra parte, en las facultades de los Ayuntamientos designar las personas que deben componer cada casilla, segun los artículos 11 y 22 del decreto número 172 y 3º y 7º del número 253, con los demas fundamentos y razones que se vierten en los informes rendidos al Juzgado sobre el negocio, que el suscrito dá en esta parte por reproducidos, el O. Juez estará convencido de que no existe ninguna garantía individual atacada ni artículo alguno de la Constitución infringido en los motivos que se alegan.

Sin embargo, hay ademas de lo dicho, en concepto del que suscribe, una consideración general de mayor peso todavía, y que consiste en la incompetencia de los tribunales federales para decidir sobre cuestiones relativas exclusivamente al régimen interior de un Estado de nuestra confederación, cuestiones que deben tener y tienen dentro del mismo Estado la autoridad única competente para decidir las, sin que pueda concederse tal prerrogativa á ninguna autoridad de fuera, por elevada que sea, sin poner en peligro la independencia y atacar la soberanía del Estado de que se trate.

Así pues, tratándose por los quejosos de la aplicación buena ó mala de leyes electorales que pertenecen exclusivamente á la organización interior del Estado de Jalisco garantizado en su soberanía ó independencia por el artículo 40 de la Constitución federal, y pretendiéndose por los mismos, so pretesto de un juicio de amparo, que la Justicia federal se ingiera á calificar de malos ó buenos, de válidos ó nulos ciertos actos de elecciones, sobre los que solo pueden decidir los colegios electorales ó corporaciones relativas del mismo Estado, se quiere nada menos que ese Juzgado extralimite sus facultades y cometa el grave delito de usurpación de atribuciones.

Por todo lo expuesto, considerando el Promotor la malicia con que han procedido los peticionarios, que por otra parte no son insolventes, y con fundamento del artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, concluye pidiendo:

Primero: que volviendo el Juzgado en lo posible sobre sus pasos, revoque su decreto de suspensión interinaria dictado contra las elecciones municipales que se practicaban en esta Capital el 2 del corriente.

Segundo: que la Justicia de la Union no ampare ni proteja á los petentes contra las disposiciones y actos de que se quejan.

Y tercero: que se imponga á los peticionarios la multa de quinientos pesos.

Guadalajara, Noviembre 11 de 1873.—  
A. Camarena.

#### *Sentencia del O. Juez de Distrito.*

Guadalajara, Febrero 17 de 1874.—  
Vistos: El 2 de Noviembre del año próximo pasado, á la vez que se efectuaban las elecciones municipales, se presentaron al Juzgado de Distrito varios individuos pertenecientes á diversos clubs, pidiendo amparo contra algunos actos referentes á las mismas elecciones, por creer que se violaban las garantías consignadas en los artí-

99, 14, 35 en su fracción 1ª, 39 y 109 de la Constitución general de la República, y pretenden demostrar aquella violación, alegando:

1º: Que el decreto núm. 370 de la Legislatura del Estado, vino á privar á los clubs á que pertenecen los quejosos, de un derecho exclusivo para intervenir en la elección por medio de sus fiscales, derecho acordado previamente en la ley orgánica electoral de Jalisco, fecha 12 de Diciembre de 1870, y el decreto núm. 253 su correlativo, conforme á cuyas disposiciones, solo las convenciones políticas establecidas dos meses antes de la elección tienen derecho para nombrar fiscales, y no las organizadas con posterioridad, como el citado decreto núm. 370 lo ha permitido, concediendo igual derecho á los clubs que se establecieron con veinte días de anticipación.

2º: Que estando prohibido por el art. 53 de la ley electoral y el 3º del decreto 253, que los empleados intervengan en las mesas encargadas de recibir la votación, para evitar la influencia administrativa; sin embargo, á varios municipales del Ayuntamiento que á la vez eran empleados, se les dió la comisión de presidir las mesas ó registros electorales.

3º: Por último, que teniendo derecho los fiscales nombrados por los clubs, según la repetida ley electoral, para ejercer sus funciones en las casillas electorales para que fueron designados, el Ayuntamiento los nombró para otras, donde no podían cumplir su comisión por falta de conocimiento de los ciudadanos de la sección.

Tales son en resumen los hechos y motivos del amparo, que los quejosos encuentran comprendidos en la fracción 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, con arreglo á la cual concluye pidiendo: que tanto el Ayuntamiento como las mesas electorales y el mismo Gobierno del Estado, suspendieran los actos electorales que se estaban verificando.

En un otro si firmado únicamente por los

TOMO V.—PARTE II.

ciudadanos Fernando Rodriguez, Juan Celayeta y Alfredo Narvaez, se recusó sin causa al Juez de Distrito propietario, C. Diego L. Trejo y á su secretario C. Guadalupe J. Gallegos; y con causa, por ser fiscal del Tribunal de Justicia, al C. Lic. Trinidad Sanchez Aldana, primer suplente del Juzgado de Distrito.

En virtud de las antecedentes recusaciones, el Juez de Distrito propietario pasó el mismo día 2 este asunto al segundo suplente C. Lic. Ignacio Navarrete, quien calificando de legales las recusaciones interpuestas, se avocó desde luego el conocimiento del amparo promovido, haciéndolo saber á algunos de los quejosos, y en seguida, por la urgencia del caso y fundado en el art. 5º de la ley orgánica de los arts. 101 y 102 de la Constitución general del país, mandó suspender el acto electoral reclamado, comunicando su resolución al C. Gobernador del Estado, Ayuntamiento de la Capital y presidentes de las ocho casillas electorales de la misma, quienes respetando la justicia federal, suspendieron las elecciones, aunque protestando solemnemente contra la providencia dictada.

El Ayuntamiento en el informe con justificación que el juzgado de Distrito le pidió, combatiendo el escrito de amparo, dice: Primero: que en los diversos actos electorales en que ha intervenido, se ha sujetado estrictamente á las leyes vigentes sobre la materia. Segundo: que el art. 53 de la ley electoral ó sea el decreto núm. 204, está derogado por el art. 12 del decreto núm. 370. Tercero: que la prohibición consignada en el art. 3º del decreto núm. 253, para que los empleados puedan formar parte de la mesa electoral, se refiere únicamente á los vecinos que en defecto de fiscales propuestos por las convenciones políticas, debe nombrar el Ayuntamiento. Cuarto: que los arts. 22 y 23 del decreto núm. 172 sobre incompatibilidad, no son aplicables en el presente negocio, estando además derogados por un decreto posterior, cual es el 250 de

que antes se hizo mérito. Quinto: finalmente, que si de entre los fiscales propuestos, por los círculos políticos, eligió los escrutadores y secretarios de las mesas, es porque el artículo 7º del decreto últimamente mencionado previene, que el *Ayuntamiento en todo caso nombrará entre los fiscales que se le propongan ó de los vecinos en su caso, cuatro secretarios y cuatro escrutadores, que asociados del munícipe respectivo, forme cada mesa electoral*; sin quitar con esto á los demas fiscales nombrados por las diferentes convenciones políticas, el derecho que la ley les dá, para que las representen con ese carácter.

El C. Gobernador del Estado, despues de repetir en su informe, visible á fojas 16 á la 21 de estos autos, que él no es el ejecutor de las leyes electorales, y de transcribir el anterior documento del cuerpo municipal, agrega: que como lo que indebida é ilegalmente se ha llamado *juicio de amparo*, no es sino la conculcacion de los derechos de un Estado soberano, en asuntos de su régimen interior, sienta el deber de fundar las razones que á Jalisco asisten, para haber protestado contra la invasion de la autoridad federal en las elecciones municipales, y descendiendo á cada uno de los puntos en que los peticionarios fundan el amparo combate el *derecho exclusivo* por estos alegado, primero: diciendo que al legislador de Jalisco incumbe determinar las condiciones de sus electores y elegibles, y la manera de efectuarse la eleccion. Segundo: que no es admisible un privilegio exclusivo en materia de eleccion. Tercero: que no puede ser materia de amparo de garantías, una disposicion que ensancha la intervencion del pueblo en actos electorales. Cuarto: que el decreto 370, no hizo sobre este punto sino lo que ya antes el 253 había hecho, dispensando de la observancia del art. 39 de la ley electoral, considerando como convenciones políticas, las que se organizaran veinte dias antes de las elecciones, y que malamente puede decirse contraria al

art. 109 de la Constitucion, una medida que quita privilegio exclusivo, en el acto en que la soberanía popular se ejerce.

En cuanto á la intervencion de los *municipes empleados*, aducida por los quejosos, como restriccion de la libertad del sufragio, el Gobierno, ampleando lo expuesto sobre el particular por el Ayuntamiento, manifiesta: Primero: que muy fuera del caso se cita el decreto núm. 172 sobre incompatibilidades, previniendo esa misma disposicion en su art. 11, que los funcionarios de nombramiento popular, como son los *municipes*, cuya capacidad para serlo demarca la Constitucion, y cuya aptitud califica el pueblo, no son objeto de sus anteriores prescripciones, y estan sometidos á lo que decidan los colegios electorales, ó corporaciones á quienes corresponda resolver sobre la validez ó nulidad de sus elecciones. Segundo: y que si el art. 39 del decreto núm. 253 previene que el Ayuntamiento nombre un *munícipe* de su seno, que asociado de un fiscal de cada círculo político, y no habiéndolo, de vecinos que no sean funcionarios ni empleados, formen las mesas electorales, y si esa ley en su art. 15 deroga la ley orgánica electoral, en todo lo que se oponga á sus prevenciones, es claro que se han invocado leyes derogadas, aun adulterando su sentido, sin mas fin que dar intervencion á la autoridad judicial de la federacion, en el acto mas solemne en que el pueblo Jalisciense ejerce su soberanía.

Con respecto al tercer punto en que se funda la peticion de amparo, el C. Gobernador sostiene en el fondo y con las mismas razones alegadas por el cuerpo municipal, el derecho que este tuvo conforme á la ley para designar de entre los fiscales nombrados por los círculos políticos, los secretarios y escrutadores de las mesas electorales; pero al terminar en su informe, al cual acompaña los decretos 172, 204, 253 y 370, citados en el mismo, hace una nueva observacion fundado en el artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, que pre-

vieno que la sentencia en los los juicios de amparo, sea siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos en el *caso especial* sobre que versa el proceso, sin hacer ninguna declaracion general sobre la ley ó acto que la motivare; y que el Juez 2º suplente de Distrito, separándose de tan terminante precepto, al suspender el acto reclamado, no se limitó á separar á los fiscales que no tenían el derecho exclusivo alegado por los quejosos, ni á los municipales empleados, ni tampoco señaló á gusto de los peticionarios, los secretarios y escrutadores de cada mesa, sino que hizo lo que la Constitucion prohíbe; suspendió la eleccion, y con esto el cumplimiento general de una ley de Jalisco.

Recabados los anteriores informes, con fecha 5 del citado Noviembre se mandaron pasar los autos al C. Promotor fiscal, á cuyo estudio no llegaron sino hasta el dia 8, y el 11 dió la respuesta que se registra en las fojas 7 vuelta, y las 34 á la 38 inclusive.

En ellas, despues de llamar la atencion al Juzgado sobre no haberse pasado al primer Juez suplente de Distrito la queja, en virtud de la recusacion del propietario, despues de notar la festinacion con que este asunto se ha llevado en sus primeras diligencias, y la lentitud con que se ha procedido, con posterioridad á la suspension del acto electoral reclamado, hasta el grado de dejar pasar cuatro dias útiles sin entregarle los antecedentes para que abriera su pedimento; por último, despues de hacer constar que el Juez 2º suplente se valió de los mismos quejosos para que condujeran las órdenes libradas á los presidentes de las casillas sobre suspension de elecciones, el referido Promotor fiscal niega la procedencia de la suspension del acto reclamado, por no estar comprendido el solicitado amparo en la fraccion 1ª artículo 1º de la ley orgánica de garantías individuales; por no haberse limitado á proteger á individuos particulares, ni sobre los tres hechos que

marcan, sino que fué general contra todos los ciudadanos, atentatoria á la soberanía del pueblo, invasora de la independencia de Estado, contraria á los artículos 40, 102 y relativos de la Constitucion federal, estendiéndose á suspender las elecciones municipales, y dando mucho mas de lo que se le pedia. Se estiende despues con el fin de demostrar, que los tres hechos sobre que el amparo se funda, de ningun modo atacan los artículos 9º, 14, 35, 39 y 109 de la Constitucion, en las elecciones municipales del 2 de Noviembre. Niega á Tribunales federales competencia alguna para decidir sobre cuestiones relativas, exclusivamente al regimen interior de un Estado. Considerando por último el C. Promotor, la malicia con que han procedido los peticionarios, que por otra parte estima como no insolventes, y fundado en el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, concreta su peticion, primero: á que se revoque la suspension interinaria de las elecciones municipales. Segundo: á que se declare que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los peticionarios, contra las disposiciones y actos de que se quejan. Tercero: finalmente, á que se imponga á los mismos una multa de 500 pesos.

En este estado del juicio y habiéndose recibido un despacho telegráfico de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en que dispone, se suspenda al Juez segundo suplente de Distrito, consignándolo al Superior Tribunal de Circuito, y que el que suscribe como tercer suplente del referido Juzgado, continuara conociendo del amparo de que se ha hecho mención, despues de algunos obstáculos presentados para la entrega, el infrascrito se avocó el conocimiento del presente negocio, en cumplimiento del superior mandato, y por auto de 17 de Noviembre del año anterior, revocando en ese mismo auto con los fundamentos en el expuestos, al auto del dia 2 del citado mes en la parte que mandó suspender las elecciones municipales, y citando á las partes á que-



nes se señaló el término de seis días para sus alegatos; pero como al siguiente día 18 algunos de los peticionarios, recusan al infrascripto, este incidente ha dilatado la terminación del amparo, hasta que la Suprema Corte declaró, en 21 de Enero del presente año, ser improcedente la recusación últimamente entablada. En cuya virtud y después de practicadas las diligencias prevenidas en la ley orgánica de 20 de Enero de 1869 para la sustanciación del juicio de amparo. Vistos los informes presentados por el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado; la respuesta del C. Promotor fiscal, y demás documentos que obran en el presente juicio.

Considerando primero: que en ninguno de los tres hechos en que los solicitantes fundan el amparo, hay garantía alguna constitucional violada, que pueda ser materia del presente juicio.

Segundo: que á ninguno de los quejosos se ha privado del derecho de votar en las elecciones populares, que el día 2 de Noviembre último se celebraban en esta Capital, y en consecuencia, mal puede decirse que en sus personas se ha violado la garantía consignada en la fracción 1ª artículo 35 de la Constitución federal.

Tercero: Que el decreto 370 de la Legislatura de Jalisco, no entraña la retroactividad que señalan los quejosos, puesto que fué sancionado con la debida oportunidad, preconstituyendo las condiciones de las convenciones políticas para intervenir en la futura elección.

Cuarto: Que el citado decreto, lejos de restringir, ensancha la acción popular en la formación de aquellas mismas convenciones políticas, como antes ya lo había hecho el decreto 253; pero sin privar á ningún ciudadano del derecho de sufragio, ni del de reunión, consignado en el artículo 9º de la Constitución general.

Quinto: Que los Estados de la confederación Mexicana, conforme á los artículos 40 y 117 de la Carta fundamental y en ejerci-

cio de su soberanía, gozan de la plenitud de poder para expedir las leyes convenientes á su régimen interior, sin que al poder federal le sea permitido ingerirse en su administración y gobierno privado.

Sexto: Que Jalisco en uso de su soberanía, ha reglamentado las elecciones locales y generales del Estado, en sus decretos 240, 253 y 370, respetando los preceptos consignados en el Pacto fundamental de la Nación y especialmente el que se registra en el 109 del mismo Código.

Sétimo: Que en el juicio promovido, mas bien que un amparo individual por garantías violadas, se ha solicitado del tribunal federal la suspensión del cumplimiento general de una ley del Estado de Jalisco, á que en ningún caso debe acceder, por hallarse expresamente prohibido en el artículo 102 de la Constitución general de la República, y 2º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, que terminantemente previene, que las sentencias de los juicios de amparo sean siempre tales, que solo se ocupen de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que versa el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley ó acto que lo motivare.

Octavo: Por último, que los quejosos aunque en la petición de su infundado amparo, han alegado siniestramente leyes derogadas como lo ha demostrado el C. Gobernador de Jalisco, con el fin de sorprender al tribunal federal, y se han hecho acreedores á la pena marcada en el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, esa multa debe aplicarse, no por este Juzgado, como el C. Promotor fiscal lo pretende, sino por la Corte Suprema de Justicia en su última sentencia.

El Juez que suscribe, fundado en las anteriores consideraciones, y de conformidad con los artículos 29, 13 y 27 de la ley orgánica fecha 20 de Enero de 1869, falla definitivamente con las siguientes proposiciones: Primera: la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los peticionarios,

por las leyes ó actos reclamados al verificarse el 2 de Noviembre del año próximo pasado, las elecciones municipales de Guadalajara. Segunda: notifíquese esta sentencia á quienes corresponde, y publíquese en el periódico oficial del Gobierno del Estado, y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para su revision; reponiéndose previamente por los interesados, el papel sellado de que se ha usado en esta actuacion, con el del sello correspondiente.

El Juez tercero suplente de Distrito de Guadalajara, lo determinó y firmó con testigos de asistencia por recusacion del secretario.—*Lic. F. Bonilla.*—A.—*Guadalupe Zapata.*—A.—*José Ortigosa.*

Es copia que certifico. Guadalajara, 14 de Marzo de 1874.—*Lic. F. Bonilla.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Abril 6 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por las personas cuyas firmas aparecen en el escrito de fojas 1 á la quinta, miembros de varios clubs de Guadalajara, contra algunos actos de las autoridades encargadas de intervenir en las elecciones municipales de la misma ciudad que debieron verificarse el día 2 de Noviembre del año pasado, actos que segun manifiestan los quejosos violan las garantías consignadas en los artículos 9, 14, 35 fraccion 1ª, 39 y 109 de la Constitucion federal; haciendo consistir la violacion, Primero: En que se ha puesto en ejecucion la ley del Estado de fecha 27 de Setiembre del año pasado, que permite á las convenciones políticas organizadas con veinte dias de anticipacion á las elecciones, nombrar fiscales para intervenir en las mismas elecciones, privando de esta manera á los clubs á que pertenecen los promoventes del derecho que tenían adquirido, de nombrar fiscales conforme á la ley electoral del Esta-

do de 12 de Diciembre de 1870, y al decreto número 253, que previenen, que solamente las convenciones políticas establecidas dos meses antes de verificarse la eleccion, tienen derecho para nombrar dichos fiscales y no las formadas con posterioridad como lo concede la citada ley de Setiembre, con violacion del artículo 14 constitucioanal. Segundo: que á pesar de estar prohibido por la ley electoral y el decreto número 253, que los empleados intervengan en las mesas encargadas de recibir la votacion, varios miembros del ayuntamiento que son empleados á la vez, fueron comisionados para presidir las mesas, infringiéndose el citado artículo 14 de la Constitucion, por no haberse observado la ley exsactamente. Tercero: que no obstante tener derecho los fiscales nombrados por los clubs para ejercer sus funciones en las mesas para que fueron designados, conforme á la ley electoral, el ayuntamiento los nombró para otras distintas, conculcando el libre sufragio y la garantía consignada en el artículo 35 fraccion 1ª de la expresada Constitucion; y Considerando: que la ley que estendió la facultad de nombrar fiscales á las asociaciones políticas organizadas con veinte dias de anticipacion á las elecciones, no puede privar á los quejosos, dando efecto retroactivo á la ley, de un privilegio esclusivo que no tenían, el de nombrar esos fiscales, perteneciendo como pertenece esa facultad á la clase de derechos políticos que en ninguna manera pueden ser objeto de un privilegio que debiera prevalecer aun contra la misma ley, por cuyo motivo esta, al ampliar aquel derecho, en nada ha vulnerado el artículo 14 del pacto federal; que el artículo 14 que se acaba de citar en la parte que previene que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exsactamente aplicables, solamente garantiza la exsacta observancia de la ley, en los negocios judiciales, por cuya razon no puede ser objeto de este recurso la infraccion que se dice haberse cometido de nombrar empleados para presidir las mesas



electorales; que el haber designado el ayuntamiento á los fiscales casillas distintas de apuellas para que fueron nombrados, no ha privado á los quejosos del derecho de emitir un voto en las elecciones que iban á verificarse, quedando ileso, por tanto, la prerrogativa que consigna la fracción 1ª del artículo 35 de la Constitución para todo ciudadano, de votar en las elecciones populares; que no se ha explicado por los solicitantes en que consistió la violación de los artículos constitucionales 99, 39 y 109, ni aparece que hayan sido infringidos por alguno de los tres hechos que han dado origen á este recurso, pues que en nada se restringió por ellos la libertad de asociación que es objeto del artículo 99, ni constituyen ataque directo á la soberanía popular que reconoce el artículo 39, ó á la forma del Gobierno republicano representativo popular que el artículo 109 impone á los Estados: que si bien el C. Juez 2º suplente Lic. Ignacio Navarrete ha sido ya suspendido y consignado al Tribunal de Circuito de Guadalajara por haber decretado la suspensión de las elecciones municipales, existen otros procedimientos en este juicio, autorizados por dicho suplente, que dan lugar á que también por ellos se le ponga á disposición del Tribunal de Circuito: tales son haber calificado la legalidad de la recusación del Juez propietario y excusa del 1º suplente; así como haber opuesto resistencia á obedecer el acuerdo del C. Presidente de esta Corte, su entrega inmediata al 3º suplente, del expediente formado con motivo de este juicio.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 101 de la Constitución federal y 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta. Primero: Es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 3º suplente de Distrito de Jalisco en 17 de Febrero de 1874, que declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los quejosos contra las leyes y actos que han motivado el presente recurso. Segundo: Se impone á los pe-

tionarios una multa de cien pesos. Tercero: remítanse al Tribunal de Circuito de Guadalajara las constancias conducentes de este recurso, para que surtan sus efectos en juicio de responsabilidad que se instruye al Lic. Ignacio Navarrete como Juez 3º suplente de Distrito.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Ianda*, secretario.

Es copia. México, Julio 4 de 1874.—*Alejo Gómez Eguarte.*

## CRIMINAL

*Causa instruida en el Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco contra los CC. José Prieto, Lorenzo L. Torres y Alberto G. Bango, por sospechas de haber abierto una carta con objeto de extraer de ella unos documentos que se remitan al C. Administrador general de Correos.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito*

Guadalajara, Diciembre 15 de 1873.—No hay méritos para proceder contra los CC. José Prieto, Lorenzo Jones y Alberto Bango. Remítase ésta averiguación al Superior para su revisión.

El C. Juez 3º suplente de Distrito lo decretó y firmó.—*Trinidad Bonilla*—*Guadalupe J. Gallegos*, secretario.